

Guadalajara, Jalisco, 06 seis de junio del año 2022 dos mil veintidós.

Vistos para resolver los autos del toca **285/2022**, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por **[No.1]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]** y **[No.2]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, el primero como representante común de **[No.3]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.4]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.5]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.6]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.7]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]** y **[No.8]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, todos de apellidos **[No.9]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, y la segunda como tutriz interina de **[No.10]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, en contra del Auto de fecha 24 veinticuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós, pronunciada por el ciudadano Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Partido Judicial con residencia en Unión de Tula, Jalisco, en los autos del juicio de **JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (declaración de estado de interdicción)**, promovido respecto a **[No.11]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, radicado bajo expediente **366/2020**, y;

## RESULTANDO:

1. El juez natural al pronunciar el proveído impugnado, lo hizo en los siguientes términos:

**“UNIÓN DE TULA, JALISCO, 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.**

Por economía procesal se procede acordar a los escritos de fecha 03 tres de febrero del 2022 y 11 once de febrero del 2022 en los siguientes términos:

Se tiene por recibido el oficio [No.12] ELIMINADO el No. 59 [59] del cuadernillo e exhorto [No.13] ELIMINADA la información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento civil [78] del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán de navarro, Jalisco; en el que informa mediante oficio [No.14] ELIMINADO el No. 59 [59] expedido por el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Autlán de navarro, Jalisco y en atención a lo ordenado por este juzgado le informo que se procedió a inmovilizar la propiedad ubicada en la [No.15] ELIMINADO el domicilio [2].

Por recibido el oficio [No.16] ELIMINADO el No. 59 [59] que remite el Jugado (sic) Segundo de lo Civil del Décimo Segundo Partido Judicial Autlán, Navarro, Jalisco, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto que le correspondió en turno derivado del presente juicio, mismo que se ordena agregar en autos para que surta sus efectos legales conducentes, a la luz de los artículos 99 y 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Por recibido el oficio [No.17] ELIMINADO el No. 59 [59] que remite la Secretaria General de Acuerdos por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con lo en el actuado, mismo que se ordena agregar en autos para que surta sus efectos legales conducentes, a la luz de los artículos 99 y 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Conforme al escrito presentado con fecha 27 veintisiete de enero del año en curso, téngase recibido en oficialía de partes de este Juzgado, el escrito firmado por [No.18] ELIMINADO el nombre completo [1]; visto su contenido y en atención a lo que solicita, se le tiene manifestando su inconformidad y oposición a las presentes diligencias, en su carácter reconocido del hijo conforme al acta de nacimiento certificada por el C. Oficial del Registro Civil número [No.19] ELIMINADO el No. 59 [59], de este municipio de Unión de Tula, Jalisco, fundador de las diligencias de jurisdicción voluntaria de su señora madre [No.20] ELIMINADO el nombre completo [1] (SIC); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 970 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismo que señala la circunstancia que exige la ley para la procedencia de la jurisdicción voluntaria, como es la inexistencia de controversia en el trámite de tales diligencias, el presente negocio deberá hacerse contencioso y sujetarse a los trámites establecidos para el juicio correspondiente. En virtud de lo anterior, se da concluido el presente procedimiento por las razones anteriormente expuestas, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Atendiendo a la aplicación de las siguientes tesis bajo los rubros y textos:

**JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, LA OPOSICIÓN A LA, DA LUGAR A INICIAR OTRO PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).** Conforme a una interpretación armónica de los artículos 954, 959, 1056 y 1062 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, la oposición que se suscita en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, ocasiona que el negocio se torne contencioso a consecuencia de la desaparición de la circunstancia que exige la ley para la procedencia de la jurisdicción voluntaria, como es la inexistencia de controversia en el trámite de tales diligencias. Es decir, en el momento en que surja una oposición de parte legítima para hacerla, el negocio, mas no el trámite, se convierte en contencioso, pues las diligencias dejan de tener los requisitos necesarios para seguirse tramitando en la forma como se venía haciendo, como es la ausencia de toda controversia y, en consecuencia, se podrá iniciar otro procedimiento, cuya esencia estaría determinada por la contienda que se entablaría en contra del opositor, lo que requiere de la precisión de los hechos que constituirán la acción que se habrá de ejercitar y de la fijación de las prestaciones. Este criterio se confirma si se atiende al espíritu de los artículos 1056 y 1062 mencionados, que reglamentan la existencia de la oposición en una clase determinada de diligencias de jurisdicción voluntaria, en las que el legislador ordenó que se dieran por terminadas y que se reservaran los derechos de los interesados para que los hagan valer en juicio ordinario, respecto de algunos casos, pero en ninguno de esos supuestos mandó continuar el trámite de tales diligencias de jurisdicción voluntaria.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 34/97. Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVI, página 812, tesis de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA."

**JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).**

Conforme al citado precepto, cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, pueden ocurrir dos hipótesis: 1) si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; y, 2) si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima, en ese momento debe darse por concluido el procedimiento, sin considerar que se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio. Por tanto, el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo debe interpretarse en el sentido de que al presentarse oposición de parte legítima, el procedimiento de jurisdicción voluntaria debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente, sin mayor trámite y sin algún otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de

jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, motivo suficiente para concluirlo.

Contradicción de tesis 188/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Noveno Circuito. 10 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Tesis de jurisprudencia 117/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez.

En consecuencia, de lo anterior se dejan sin efecto las medidas decretadas bajo el auto de fecha 15 quince de Septiembre del año 2021 dos mil veintiuno visible en las fojas 86 ochenta y seis de las presentes actuaciones por lo cual se ordena girar de nueva cuenta atento oficio a la dependencia del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Autlan de Navarro, Jalisco, con el fin de dejar sin efecto alguno lo contenido dentro del oficio número [No.21] ELIMINADO el No. 59 [59].

De igual manera se ordena nuevamente girar atento oficio con los insertos necesarios al DIRECTOR MUNICIPAL DE CATOTRO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNIÓN DE TULA, con el fin de dejar sin efectos la media ordenada mediante el auto de fecha 17 diecisiete de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno bajo la foja número 158 ciento cincuenta y ocho de las presentes actuaciones. Lo anterior con fundamento en los artículos 959, 960, 961 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Finalmente, se ordena devolver los documentos aportados por el promovente previo recibo, razón e identificación que otorgue en autos al momento de recibirlos, dejándose a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma correspondiente.

En su oportunidad se ordena archivar el expediente como asunto concluido, de conformidad a lo establecido por el artículo 109 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.”

2.	Inconformes
[No.22] ELIMINADO el nombre completo [1]	y
[No.23] ELIMINADO el nombre completo [1],	el primero
como representante común	de
[No.24] ELIMINADO el nombre completo [1],	
[No.25] ELIMINADO el nombre completo [1],	
[No.26] ELIMINADO el nombre completo [1],	
[No.27] ELIMINADO el nombre completo [1],	
[No.28] ELIMINADO el nombre completo [1]	y
[No.29] ELIMINADO el nombre completo [1],	todos de

apellidos [No.30]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], y la segunda como tutriz interina de la persona incapaz [No.31]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], interpusieron recurso de apelación, mismo que fue admitido en **AMBOS EFECTOS**; turnadas las actuaciones a esta Sala, por auto de fecha 17 diecisiete de mayo del 2022 dos mil veintidós, se admitió la apelación y se confirmó la calificación del grado; se tuvo los apelantes expresando agravios y señalando domicilio procesal para recibir notificaciones en esta segunda instancia, asimismo, se le tuvo designando abogados patronos a los profesionistas señalados en su ocurso; ordenándose notificar a [No.32]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], por medio de Boletín Judicial, hasta en tanto no señalare domicilio para tal fin; tomando en consideración que dentro del presente proceso se encuentran involucrados derechos de una persona presuntamente incapaz, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 ter, se ordenó dar al Agente de la Procuraduría Social del Estado, la intervención que en derecho corresponde; una vez recibida la vista, se citaría para sentencia.

Por último, por acuerdo de fecha 24 veinticuatro de mayo último, se tuvo por recibido el escrito presentado por **ALMA JOSEFINA MARTÍNEZ MONTES**, en su carácter de Agente de la Procuraduría Social, mediante el cual, realizó manifestaciones; en consecuencia, se reservaron los autos a la vista de los integrantes de ésta Sala, para dictar sentencia, misma que se pronuncia de acuerdo a los siguientes:

## **C O N S I D E R A N D O S:**

**I. COMPETENCIA:** Acorde a lo establecido en el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jalisco, esta Sala resulta competente para conocer y resolver la apelación interpuesta.

II. AGRAVIOS EXPUESTOS:

[No.33] ELIMINADO el nombre completo [1] y  
[No.34] ELIMINADO el nombre completo [1], el primero  
como representante común de  
[No.35] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.36] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.37] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.38] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.39] ELIMINADO el nombre completo [1] y  
[No.40] ELIMINADO el nombre completo [1], todos de  
apellidos [No.41] ELIMINADO el nombre completo [1], y la  
segunda como tutriz interina de la persona incapaz  
[No.42] ELIMINADO el nombre completo [1], manifestaron  
como agravios los siguientes:

“PRIMERO.- El auto que se impugna, violenta la **LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES**, que es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estado Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de la personas adultas mayores, atentos a las disposiciones legales contenidas en los artículos 3º fracción I, II y XII; 3º fracciones III y IV; 4º fracción I; 5º fracción I incisos f) y g), fracción II incisos a), d), fracción III, incisos a) y d) fracción III, inciso a), fracción VIII; 9º fracción I y II; 10º fracción I, III; 27º fracción III; 28º fracción II, V; 43º fracciones I, II y III; y 46º.

Así como lo que establece la **LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE JALISCO**, en sus artículos 1º; 2º fracción I y II; 4º fracciones I y II; 6º fracción I, incisos f) y g), fracción II incisos a), e), y j), k) fracción VI, incisos b) c), d), 7º; 8º; 12º fracción X y 32º fracciones I y II.

Como también la **LEY ESTATAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD, PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO**, en los numerales 1º; 4º; 6º y 21 fracciones I y II.

SEGUNDO.- Si bien es cierto que el artículo 959 del Código local de procedimientos Civiles establece “si a la solicitud promovida



se opusiere alguno que tenga personalidad para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecido para el juicio que corresponda.”; no menos resulta ser cierto, que la resolución que combatimos, violenta en perjuicio de nuestra madre [No.43]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], las disposiciones legales de mérito, pues éstas, son de orden público, interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.

TERERO.- En efecto, la resolución que atacamos a través del RECURSO referido, su pronunciamiento, como ya lo dijimos, violenta en contra de nuestra representa, las garantías de seguridad jurídica, audiencia y de defensa, prevista por los artículos 14, 16, 17 y aplicaciones de la Constitución General de la República, toda vez, que el interés de los suscritos y los que signaron la solicitud en el que se pide el estado de interdicción de nuestra madre [No.44]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], quien cuenta en la actualidad con 94 años, tiene como medida, otorgarle, como lo hemos expresado, protección física, mental y social, evitando la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, ya que, de acuerdo a los dictámenes emitidos por los peritos en psiquiatría Doctora [No.45]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], designada por esta parte, Doctor también en psiquiatría [No.46]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], designado por el titular de este jugado, en él que concluyeron que nuestra madre [No.47]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], padece de incapacidad psíquica y demencia vascular, desde hace aproximadamente diez años, a partir de la fecha de la celebración de la audiencia que se llevó a cabo, ante el Lic. [No.48]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], Notario Público número [No.49]\_ELIMINADO\_el\_número\_16\_[16], por lo tanto carece de capacidad jurídica; no obstante lo anterior, nuestros hermanos [No.50]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], [No.51]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], [No.52]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], [No.53]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] y [No.54]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], de apellidos [No.55]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], se negaron a suscribir la solicitud a través de la cual pedimos el Estado de Interdicción, lo anterior obedece a que tenemos la presunción grave que han estado dilapidando bienes de nuestra madre [No.56]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], y en especial nuestro hermano [No.57]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], que habiendo obtenido aproximadamente hace dos años, a partir de esta fecha, con engaños y aprovechándose de la salud mental de nuestra madre, la convenció para que le otorgara documentos para llevar a cabo actos de dominio en su representación, obteniendo dinero de inversiones bancarias y posiblemente transmitiendo en propiedad a terceras personas bienes inmuebles, con lo que ha afectado el patrimonio personal de la presunta incapaz, y por lo consiguiente, a tener acceso a los satisfactores necesarios,

considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

CUARTO.- Los que esto suscriben el presente ocurso, denunciaremos ante los órganos competentes todos los actos, omisiones que han llevado a cabo nuestro hermano y demás que se negaron a firmar la solitud de Estado de Interdicción, porque han originado producir daño y afectación a sus derechos y garantías que establece la ley de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5º fracción VIII que establece:

“De la denuncia popular:

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto, u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materia relacionadas con las personas adultas mayores”

Así las cosas, la resolución de mérito de la cual nos inconformamos violenta en agravio de nuestra madre [No.58] ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], las disposiciones legales invocada al inicio de este libelo, porque el único afán de nuestros hermanos (que son minoría los que se negaron a firmar la solicitud multireferida, ya que los que suscribimos ésta somos la mayoría), y en especial de [No.59] ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], en oponerse a la continuación de las diligencias precitadas, es para seguir dilapidando los bienes que conforman el patrimonio de la presunta incapaz, amparado como ya lo establecimos en líneas precedentes, presumiblemente, en documentos para llevar a cabo actos de dominio, que fueron arrancados a través de violencia psíquica a nuestra madre, documento o documentos que en su oportunidad se demandará la nulidad correspondiente; por tanto, el auto que recurrimos en caso de quedar firme, se dejaría a la presunta incapaz insolvente para sufragar sus necesidades, como serían ente otros, atención médica, medicamentos, etcétera.

Por último, atentos a lo que dispone el artículo 68 TER de la Ley adjetiva en cita, solicitamos se de vista del contenido de este escrito, al Agente de la Procuraduría Social adscrita a ese Juzgado, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.”

**III. CALIFICACIÓN DE LOS AGRAVIOS:** Teniendo a la vista los autos y documentos de primer grado, así como las actuaciones que integran esta segunda instancia, documentales públicas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo previsto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se anticipa que los agravios esgrimidos por



los recurrentes resultan **FUNDADOS EN PARTE** para **MODIFICAR**, el proveído impugnado, por las consideraciones y fundamentos de derecho siguientes:

**IV.- ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS:** Cabe hacer mención que esta Sala, atenderá los agravios expresados en forma conjunta, puesto que su estrecho enlace así lo permite tal y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha facultado a los órganos jurisdiccionales de segundo grado, como se desprende de la Jurisprudencia localizable en la Séptima Época. Registro: 241958. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 48 Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 15. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis 26, página 70, que dice:

***“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.** Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa es el dato sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija.”*

En síntesis, los recurrentes aducen como agravios, los siguientes:

- Violación a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, misma que es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estado Unidos Mexicanos, para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.

- Violación a la Ley para el Desarrollo Integral de Adultos Mayores del Estado de Jalisco.
- Violación a la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.
- Que no obstante lo establecido por el artículo 959 del Código local de procedimientos Civiles; dicha resolución violenta en perjuicio de [No.60]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], las disposiciones legales de mérito, pues éstas, son de orden público, interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.
- Violación a las garantías de seguridad jurídica, audiencia y de defensa, prevista por los artículos 14, 16, 17 y aplicaciones de la Constitución General de la República, ya que lo que pretenden con la jurisdicción voluntaria, es que se declare el estado de interdicción de la presunta incapaz [No.61]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], toda vez que cuenta con 94 años, lo anterior, para su protección física, mental y social, evitando la sustracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, ya que, de acuerdo a los dictámenes emitidos por los peritos en psiquiatría, éstos concluyeron que [No.62]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], padece de incapacidad psíquica y demencia vascular, aproximadamente desde hace diez años, por lo tanto carece de capacidad jurídica; que no obstante lo anterior, sus hermanos

[No.63]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.64]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.65]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.66]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] y  
[No.67]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], de  
apellidos [No.68]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]

(quienes se negaron a la solicitud para declarar el Estado de Interdicción de su madre), han estado dilapidando los bienes de su madre, en especial su hermano [No.69]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], quien por medio de engaños y aprovechándose de la salud mental de su madre, obtuvo documentos donde ella le otorgaba poder para llevar a cabo actos de dominio en su representación, obteniendo dinero de inversiones bancarias y posiblemente transmitiendo en propiedad a terceras personas, bienes inmuebles, con lo que se ha afectado el patrimonio personal de su madre, presunta incapaz.

- Que dicha resolución les causa agravio, ya que el único afán de sus hermanos y en especial de [No.70]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], es oponerse a la continuación de las diligencias precitadas, es para seguir dilapidando los bienes que conforman el patrimonio de la presunta incapaz, amparado presumiblemente, en documentos que fueron arrancados a través de violencia psíquica a su madre, documento o documentos que en su oportunidad se demandará la nulidad correspondiente.

Agravios que como se anticiparon, resultan **FUNDADOS EN PARTE para MODIFICAR** el auto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones:

Dado que el tema del diferendo interpretativo está vinculado con la figura jurídica de jurisdicción voluntaria, es pertinente hacer las siguientes precisiones:

Desde el derecho romano, la jurisdicción voluntaria ha sido considerada como un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales. Dichos procedimientos tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes. Más recientemente se ha sostenido que la jurisdicción voluntaria es lo opuesto a la contenciosa, se ejerce a solicitud de una o por consentimiento de las dos partes, en un procedimiento en el que el litigio está ausente, a veces latente pero nunca presente.

La jurisdicción voluntaria puede definirse como la función que ejercen los Jueces, a solicitud de una o varias personas, en los casos especialmente previstos en la ley, que tiene como finalidad cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas y, en consecuencia, las resoluciones que en ella recaen no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, en otras palabras, la característica primordial de la figura jurídica señalada, es la ausencia de controversia, o de parte contendiente.

Fix Zamudio define la jurisdicción voluntaria como un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social en beneficio del o de los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida.

En el derecho positivo mexicano, la jurisdicción voluntaria participa, adicionalmente, de las siguientes características:

*1) Para conocer de ella son competentes los órganos jurisdiccionales de primera instancia y, en su caso, para conocer de la apelación está el Tribunal Superior de Justicia.*

*2) La competencia territorial se determina a partir del domicilio de la persona que promueve la jurisdicción voluntaria, salvo tratándose de bienes raíces en cuyo caso se determinará la competencia por el lugar en donde se encuentran ubicados.*

*3) La legitimación procesal se acredita con las posibilidades o facultades que derivan en su favor de los varios intereses en juego, en relación con los fines específicos que debe perseguir a través del proceso mismo.*

Respecto a la jurisdicción voluntaria, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dispone lo siguiente:

**"Artículo 954.-** *La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez o del Notario Público que aquél designe como su auxiliar quien para ese efecto tendrá las mismas facultades que al juez le confiere la ley, sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, exceptuándose los actos de posesión en los que sólo intervendrá el juez o el auxiliar autorizado, cuando así lo exija la ejecución de una sentencia o en los demás casos en que la ley expresamente lo autorice o disponga.*

**Artículo 955.-** *Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. Cuando se realice la solicitud por una institución oficial, dedicada a la protección de la familia o a la asistencia pública, se presumirán como ciertos, salvo prueba en contrario, los dictámenes y documentos por ellas elaborados y que se acompañen a la misma.*

**Artículo 955 bis.-** *En su escrito inicial la parte interesada podrá solicitar y el juez, si la naturaleza del acto lo permite, deberá autorizar como su auxiliar, para el desahogo de trámites y diligencias previstas en éste Título, la intervención de un Notario Público, con facultades para actuar conforme a la Ley del Notariado en el lugar donde deban practicarse. No se proveerá la solicitud hecha en el sentido antes indicado, si en el escrito respectivo, no se contiene la designación con su nombre, apellidos, número y lugar de adscripción del Notario Público, si éste, es titular, suplente o asociado, el domicilio de su oficina Notarial, y la constancia de aceptación al cargo de auxiliar, debidamente autorizada con su firma y sello. El Notario Público, el interesado y los demás intervinientes, en todo caso, deben observar*

*las disposiciones generales y las especiales establecidas en este Título y en especial la contenida en el artículo 959. Una vez concluidos o agotados los trámites o transcurrido un mes sin que el promovente demuestre su interés en agotar los mismos, el Notario Público, protocolizará el acta o las actas que hubiere levantado para el desahogo de los citados trámites encomendados, las que hará constar en pliegos sueltos, que deberán expresar lugar, día, mes y año, en que se realizó la actuación notarial, hora de inicio y conclusión de la misma y deberá ser firmada por el Notario y personas que intervengan en el acta correspondiente o en su defecto levantará constancia de que éstos últimos, se negaron o no quisieron hacerlo o de la existencia de algún impedimento para ello. Las actas, se insertarán íntegramente en el testimonio que se expida para el juzgado que previno del conocimiento de las diligencias, o se relacionarán en dicho testimonio, anexándose copia certificada de las mismas. El testimonio deberá expedirse dentro de los quince días siguientes a declarar agotados los trámites correspondientes y presentarse en forma directa por el Notario o a través del solicitante al juzgado, el que al recibirlo ordenará se agregue al expediente correspondiente. Los honorarios del Notario serán cubiertos por quien solicitó su nombramiento e intervención, y aquél no tendrá obligación de expedir y remitir el testimonio respectivo, hasta que no estén satisfechos los mismos.*

**Artículo 956.-** *Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan por tres días las actuaciones en la Secretaría del Juzgado para que se imponga de ellas y se señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella su falta de asistencia.*

**Artículo 957.-** *Se deroga.*

**Artículo 958.-** *Se admitirán cualquiera documentos que se presenten e igualmente las justificaciones que se ofrecieren sin necesidad de citación ni de ninguna otra solemnidad.*

**Artículo 959.-** *Si a la solicitud promovida se opusiere alguno que tenga personalidad para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda.*

**Artículo 960.-** *El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción.*

**Artículo 961.-** *Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias y sólo en el efecto devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o*



*llamado por el Juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación.*

**Artículo 962.-** *Se deroga.*

**Artículo 963.-** *Los actos de jurisdicción voluntaria de que no se hiciera mención especial en este Código, se sujetarán a lo dispuesto en éste capítulo.*

**Artículo 964.-** *Los actos de que tratan los capítulos siguientes se sujetarán a las reglas que en ellos se establecen y a las contenidas en el presente, en cuanto no se opongan a lo establecido en sus respectivos capítulos”*

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, **sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio.**

En esa tesitura, y si bien es cierto, el artículo 959 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone; que si se presentará oposición que tenga personalidad para hacerlo, el negocio se hará contencioso, también lo es, que no es motivo suficiente para que el juez de origen diera por concluido el presente procedimiento, ya que en el caso que nos ocupa, se encuentran inmersos derechos de una adulta mayor de edad avanzada, por lo que al haber resuelto la conclusión de dicho trámite y dejar sin efectos las medidas provisionales decretadas en el mismo, como es, la designación de tutriz y curador interino que represente a la adulta mayor, y cancelar la orden de inmovilización de realizar cualquier acto tendiente a la transmisión del inmueble propiedad de la señora [No.71]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], se transgreden

los artículos 1° y 4° constitucionales y las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, como lo es, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por consiguiente; resulta fundado el primer motivo de disenso de que el auto violenta la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado, la Ley Estatal para promover la igualdad la discriminación en el Estado de Jalisco, lo anterior se asevera así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de marzo de dos mil diecinueve, resolvió el amparo en revisión 1368/2015,<sup>1</sup> en el que consideró que, **de una nueva reflexión** en clave evolutiva de derechos humanos y de acuerdo con una interpretación que hiciera operativa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y particularmente el artículo 12 de ese instrumento, la figura jurídica denominada “*estado de interdicción*”, **no** podía admitir una *interpretación conforme*, porque resultaba, en sí misma, violatoria de derechos respecto de las personas con discapacidad, principalmente el de igualdad y no discriminación.

**Pues bien, en dicho precedente 1368/2015, en lo que aquí interesa destacar, se sostuvo lo siguiente:**

*“Esta Sala ya ha expresado que en el modelo social de la discapacidad, la prioridad es la dignidad de las personas con discapacidad.<sup>2</sup> El instrumento jurídico que se considera como el*

---

<sup>1</sup> Por unanimidad de cinco votos de la Ministra y los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Luis María Aguilar Morales, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Juan Luis González Alcántara Carrancá (Presidente).

<sup>2</sup> Véanse los siguientes asuntos en los cuales esta Primera Sala ha desarrollado la doctrina constitucional respecto del modelo social y de derechos, sus implicaciones y consecuencias: amparo en revisión 410/2012, resuelto el 21 de noviembre de 2012. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González; amparo en revisión 159/2013, resuelto el 16 de octubre de 2013. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González;

*paradigma normativo del modelo social y de derechos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la aprobación de este instrumento se abandonó la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas asistenciales o programas de beneficencia y se reconoció su personalidad, capacidad jurídica y condición como sujeto de derechos.<sup>3</sup>*

*Por lo tanto, todo ordenamiento jurídico debe reconocer, en todo momento, que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. Desde esta perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad: nos encontramos ante una nueva realidad constitucional, en la que se requiere dejar atrás pautas de interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica, para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación.<sup>4</sup>*

*Esta Sala advierte, que otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la definición y entendimiento del concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo,<sup>5</sup> en consecuencia, la discapacidad es el resultado*

---

amparo directo en revisión 2805/2014, resuelto el 14 de enero de 2015. Ponente: Ministro ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano; amparo en revisión 1043/2015, resuelto el 29 de marzo de 2017. Ponente: Ministro ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano; amparo directo en revisión 3788/2017, resuelto el 9 de mayo de 2018. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

<sup>3</sup> Tal como lo estableció esta Sala en el amparo directo en revisión 2805/2014, resuelto el 14 de enero de 2015 por mayoría de cuatro votos. Ponente: ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano.

<sup>4</sup> Tesis de rubro y texto: **"PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.** El principio de igualdad y no discriminación se proyecta sobre todos los demás derechos dándoles un matiz propio en el caso en que se vean involucradas personas con discapacidad. Para la Primera Sala, desde esta perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad. Para ello se requiere tomar en cuenta las dimensiones o niveles de la igualdad y no discriminación, que abarcan desde la protección efectiva contra abusos, violencia, explotación, etcétera, basadas en la condición de discapacidad; la realización efectiva de la igualdad de trato, es decir, que la condición de discapacidad no constituya un factor de diferenciación que tenga por efecto limitar, restringir o menoscabar para las personas con discapacidad derechos reconocidos universalmente, y, finalmente, que se asegure la igualdad de oportunidades, así como el goce y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, nos encontramos ante una nueva realidad constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación." Ponente: Ministro [\[No.129\] ELIMINADO el nombre completo \[1\]](#) Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano.

<sup>5</sup> Cfr. Semanario Judicial de la Federación, 1ª VI/2013 (10ª), Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 634, registro 2002520, de rubro y texto: **"DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.** La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse adoptado la

*de la interacción entre las personas con deficiencias<sup>6</sup> y el entorno, es decir, las barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás.<sup>7</sup>*

*Por tanto, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con discapacidad. De acuerdo con dicho modelo, las discapacidades no deben ser entendidas como una enfermedad, pues esta afirmación comporta grandes implicaciones en el modo de concebir y regular temas atinentes a la discapacidad y, a su vez, tiene consecuencias profundas en el ámbito jurídico.<sup>8</sup>*

*Esta Sala observa que la regulación jurídica internacional y nacional sobre personas con discapacidad tiene como última finalidad evitar la discriminación y propiciar la inclusión, por lo que el análisis de toda normativa que aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación.<sup>9</sup> Dichos principios son*

---

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que involucren un actuar y no sólo una abstención de discriminar- que atenúan las desigualdades.” Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

<sup>6</sup> Como en el amparo en revisión 159/2013, resuelto en sesión del 16 de octubre de 2013, por mayoría de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

<sup>7</sup> Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Preámbulo. [...]

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

<sup>8</sup> Tesis de rubro y texto: “**CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES DEBEN ATENDER A SU FINALIDAD Y OPTAR POR LA SOLUCIÓN JURÍDICA QUE LA HAGA OPERATIVA.** El concepto de discapacidad que asume la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es un concepto rígido, sino que en ella se adopta un enfoque dinámico acorde con el concepto de discapacidad: no tiene su origen en las limitaciones o diversidades funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad produce, esto es, se debe a las barreras que se imponen a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas. Por tanto, las discapacidades no deben ser entendidas como una enfermedad, pues esta afirmación comporta grandes implicaciones en el modo de concebir y regular temas atinentes a la discapacidad y, a su vez, tiene consecuencias profundas en el ámbito jurídico. Ahora bien, el sistema jurídico tradicionalmente ha asumido un concepto de normalidad y bajo esa lente ha determinado el alcance y los límites de los derechos de las personas con discapacidad, dejando de lado que hay muchas maneras de ser persona con derechos y obligaciones. El replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas –desde el modelo social y de derechos humanos–, no puede dar lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal-anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, en coherencia con el modelo social y de derechos, las y los juzgadores deben tener presente la finalidad de la Convención y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.” Ponente: Ministro ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano.

<sup>9</sup> Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1ª VI/2013 (10ª), Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 630, registro: 2002513, de rubro y texto: “**DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN.** La regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha desarrollado, tiene como finalidad última

*transversales y deben ser el eje en la interpretación que se haga de las normas que incidan en los derechos de las personas con discapacidad.<sup>10</sup>*

*Como ya se ha dicho, el modelo social y de derechos involucra el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas. Desde este modelo no pueden darse las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal-anormal, sino que se precisa una interpretación en clave de Derechos Humanos, que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, se insiste, debe tenerse presente la finalidad de la CDPD y **optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.***

*Si bien en el amparo en revisión 159/2013 se consideró que el estado de interdicción admitía una interpretación conforme, de una nueva reflexión, en clave evolutiva de los Derechos Humanos y buscando una interpretación que haga operativa la Convención<sup>11</sup> –**particularmente su artículo 12**–, la Primera Sala de la Suprema Corte de arribó a la conclusión que la figura del estado de interdicción no es acorde con la CDPD y no admite interpretación conforme, al ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros derechos.*

*A juicio de esta Corte, la figura del estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la CDPD. Esta desproporción se ve reflejada, entre otros aspectos, en*

---

evitar la discriminación hacia ese sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así, las normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos propósitos jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones debe realizarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.” Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

<sup>10</sup> En el artículo 2 de la Convención se precisa que por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En su artículo 3 establece como unos de sus principios generales la no discriminación y la igualdad de oportunidades y, por último, el artículo 5 de la convención puntualiza las obligaciones de los Estados parte para garantizar la igualdad y no discriminación.

<sup>11</sup> Cfr. Semanario Judicial de la Federación, 1ª CXLIII/2018 (10ª), Décima Época, publicada el 7 de diciembre de 2018, registro 2018595, de rubro y texto: “**CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES DEBEN ATENDER A SU FINALIDAD Y OPTAR POR LA SOLUCIÓN JURÍDICA QUE LA HAGA OPERATIVA.** El concepto de discapacidad que asume la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es un concepto rígido, sino que en ella se adopta un enfoque dinámico acorde con el concepto de discapacidad: no tiene su origen en las limitaciones o diversidades funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad produce, esto es, se debe a las barreras que se imponen a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas. Por tanto, las discapacidades no deben ser entendidas como una enfermedad, pues esta afirmación comporta grandes implicaciones en el modo de concebir y regular temas atinentes a la discapacidad y, a su vez, tiene consecuencias profundas en el ámbito jurídico. Ahora bien, el sistema jurídico tradicionalmente ha asumido un concepto de normalidad y bajo esa lente ha determinado el alcance y los límites de los derechos de las personas con discapacidad, dejando de lado que hay muchas maneras de ser persona con derechos y obligaciones. El replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas –desde el modelo social y de derechos humanos–, no puede dar lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal-anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, en coherencia con el modelo social y de derechos, las y los juzgadores deben tener presente la finalidad de la Convención y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.” Ponente: Ministro ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano.

la repercusión que tiene sobre otros derechos, pues el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros Derechos Humanos como:<sup>12</sup> **el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y no discriminación, el debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho a una vida independiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación e inclusión en la sociedad**, por mencionar algunos. A la vista de lo expresado, se concluyó que no existe correspondencia entre la importancia de la finalidad perseguida y los efectos perjudiciales que produce la interdicción en otros derechos.

La supresión de la capacidad jurídica supone una sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, pues el propio artículo examinado menciona, sin ambigüedad o vaguedad alguna, que las personas incapaces sólo podrán ejercer sus derechos mediante sus representantes. Asimismo, la medida es excesivamente inclusiva y no contextualiza el derecho respecto de los apoyos y salvaguardias que la persona requiera para ejercer su capacidad jurídica, sino que pone el acento en la deficiencia y no en las barreras del entorno para el ejercicio pleno de todos los derechos. Es decir, la figura de interdicción representa el más claro ejemplo del modelo de sustitución de la voluntad y, al tomar en cuenta las características y condiciones individuales de la persona, niega como premisa general que todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica.

El artículo 12 de la CDPD no permite negar la capacidad jurídica basándose en la deficiencia, esto es, de modo discriminatorio, sino que exige se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio. Este aspecto es medular, pues involucra un correcto entendimiento de la discapacidad: como una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales. El artículo 2 de la CDPD señala como discriminación “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales”. Por tanto, **negar o limitar la capacidad jurídica vulnera el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y constituye una violación de los artículos 5 y 12 de la Convención, así como del artículo 1º constitucional.**

Al interpretar el artículo 12 de la CDPD,<sup>13</sup> el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha expresado, que el

---

<sup>12</sup> Observación general Nº 1 (2014) Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

<sup>13</sup> **Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley**

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida.



*derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que la capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas, en razón de su condición humana y que ésta debe mantenerse para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás: no hay ninguna circunstancia que permita privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley o que permita limitar ese derecho.*

**Capacidad jurídica y capacidad mental.** Esta Suprema Corte considera oportuno insistir en la distinción entre capacidad jurídica y capacidad mental. La capacidad jurídica consiste, tanto en la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de goce) como en la capacidad de ejercer esos derechos y obligaciones (capacidad de ejercicio). Ciertamente, la capacidad jurídica y la toma de decisiones (autonomía de la voluntad)<sup>14</sup> son conceptos que se encuentran estrechamente vinculados y constituyen herramientas fundamentales para que una persona pueda participar en la vida jurídica,<sup>15</sup> pero también tiene su impacto en la vida cotidiana. Si bien ambos –capacidad jurídica y autonomía de la voluntad– parten de una tradición civilista, se han proyectado como Derechos Humanos.

*La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que, naturalmente, varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, como pueden ser ambientales y sociales. El hecho que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni derecho alguno. En virtud del artículo 12 de la CDPD, los déficits en la capacidad mental no deben ser utilizados como justificación para negar la capacidad jurídica.<sup>16</sup>*

*Es un error común que capacidad mental y capacidad jurídica se mezclen. La discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones han sido considerados motivos legítimos para negar la capacidad jurídica, de modo que cuando se considera que una*

- 
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardas serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
  5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

<sup>14</sup> La interpretación que debe darse al artículo 12 de la CDPD se encuentra plasmada en la *Observación general Nº 1 (2014) Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley*, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

<sup>15</sup> Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, *Capacidad jurídica*, tomo IV, 2013.

<sup>16</sup> *Observación general Nº 1 (2014) Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley*.

*persona tiene una aptitud “deficiente” para adoptar decisiones –a menudo a causa de una discapacidad cognitiva o psicosocial–, se le retira su capacidad jurídica mediante el estado de interdicción. Sin embargo, contraria a la postura de sustitución de la voluntad, la CDPD reconoce, de manera expresa e indudable, el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna: no hace diferencia entre discapacidades.<sup>17</sup>*

*Para esta Primera Sala el derecho a la capacidad jurídica no es una cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, ni debe estar ligada a las condiciones mentales. Se basa simplemente en el reconocimiento de la voluntad de todo ser humano como elemento central del sistema de derechos.<sup>18</sup>*

**Apoyos y salvaguardias.** *Claramente, en el artículo 12 de la CDPD se postula como principio universal la capacidad jurídica. Por ello, esta Sala afirma que dicho postulado básico no se contrapone con admitir que existen diversos modos o maneras de ejercer esa capacidad: algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y otras personas de otro tipo de apoyos, **sin menoscabo de la capacidad misma**, lo cual es acorde con la diversidad que existe entre todas las personas.*

*Esta Primera Sala advierte que no se debe negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al apoyo que necesiten para ejercer su capacidad jurídica y para la toma de decisiones,<sup>19</sup> asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de la condición particular de la persona y de sus requerimientos personales, con el fin de que pueda ejercer, plenamente y por sí misma, su autonomía y todos sus derechos.*

*La prestación de apoyos es un mecanismo establecido en la Convención para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, garantizar su autonomía en las actividades de la vida cotidiana y fortalecer el ejercicio de la capacidad jurídica.<sup>20</sup>*

*En el informe presentado por la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>21</sup> se destaca que el apoyo es el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades cotidianas y participar en la sociedad. Para la mayoría de las personas con discapacidad es una condición fundamental para vivir y participar plenamente en la comunidad, haciendo elecciones como las demás personas. Precisamente, la existencia de barreras en el entorno*

---

<sup>17</sup> Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, *Capacidad jurídica*, tomo IV, 2013, p. 68.

<sup>18</sup> Amita Dhanda, *Advocacy Note on Legal Capacity*. World Network of Users and Survivors of Psychiatry, USA, 2012. <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

<sup>19</sup> Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación general N° 1 (2014) Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley, p. 5.

<sup>20</sup> Guía para la inclusión de personas con discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, octubre de 2018, p. 51 y ss.

<sup>21</sup> Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/34/58, Consejo de Derechos Humanos, 20 de diciembre de 2016.

*–ambientales, sociales, jurídicas, etcétera– generan la necesidad de apoyos. En consecuencia, la falta de apoyos incrementa el riesgo de la segregación e institucionalización.*

*Esta Sala considera oportuno insistir en que el sistema de apoyos es una obligación del Estado derivada del artículo 12.3 de la Convención.<sup>22</sup> Conforme a dicho instrumento, los apoyos están enfocados a facilitar la expresión de una voluntad libre y verdadera, y hacen referencia a todas aquellas medidas que son necesarias para ayudar a la persona con discapacidad, en general, a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, así como los demás derechos consignados en la Convención.*

*Se trata de una obligación vinculada a la persona, porque busca ayudar a la persona con discapacidad en una serie de actividades diferentes y, para ello, el Estado debe tomar en cuenta los rasgos de identidad de cada persona con discapacidad atendiendo a las necesidades específicas de apoyo de las personas en cada etapa de su vida. En este sentido, el apoyo debe garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su facultad de elección y control sobre su propia vida y sobre sus opiniones, sin importar su deficiencia, ni tener que seguir las opiniones de quienes atienden sus necesidades.<sup>23</sup>*

*Por tanto, el sistema de apoyos debe ser diseñado a partir de las necesidades y circunstancias concretas de cada persona, y puede estar conformado por una persona, un familiar, profesionales en la materia, objetos, instrumentos, productos, y, en general, cualquier otra ayuda que facilite el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás.*

*Sobre este tema, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que el apoyo y un nivel de vida adecuado están interconectados, y que la prestación de los servicios de apoyo necesarios para las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, aumenta su nivel de autonomía en su vida cotidiana y en el ejercicio de sus derechos.<sup>24</sup> El tipo y la intensidad*

---

<sup>22</sup> Artículo 12 [...]

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

<sup>23</sup> En el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/34/58 se destaca además que: El apoyo a las personas con discapacidad comprende una amplia gama de intervenciones de carácter oficial y oficioso, como la asistencia humana o animal y los intermediarios, las ayudas para la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de apoyo. También incluye la asistencia personal; el apoyo para la adopción de decisiones; el apoyo para la comunicación, como los intérpretes de lengua de señas y los medios alternativos y aumentativos de comunicación; el apoyo para la movilidad, como las tecnologías de apoyo o los animales de asistencia; los servicios para vivir con arreglo a un sistema de vida específico que garanticen la vivienda y la ayuda doméstica; y los servicios comunitarios. Las personas con discapacidad pueden precisar también apoyo para acceder a servicios generales como los de salud, educación y justicia, y utilizar esos servicios. [página 15]

<sup>24</sup> CESCR, *Observación general N° 5 (General Comments)*, Las personas con discapacidad, 9 de diciembre de 1994.

*del apoyo prestado variarán notablemente de una persona a otra, debido a la diversidad de personas con discapacidad.*<sup>25</sup>

*La Convención señala distintos tipos de apoyos, según se trate del derecho al que se hace referencia: para acceder a la información (artículo 4, 9 y 21); para el ejercicio de la capacidad jurídica (artículo 12); para prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso (artículo 16); servicios de apoyo a la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, es decir, para la vida independiente (artículo 19); tecnologías de apoyo para la movilidad personal y formas de asistencia humana o animal e intermediarios (artículo 20); apoyo para los menores de edad con discapacidad y sus familias para hacer efectivo el derecho a la familia (artículo 23); apoyo a la educación (artículo 24); tecnologías de apoyo y asistencia personal para la participación en la vida política y pública (artículo 29).*<sup>26</sup>

*El acceso al apoyo adecuado es una condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan ejercer efectivamente sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás. Sin embargo, como lo señala la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el sistema de apoyos debe cumplir con cuatro elementos esenciales que pueden variar en función de las diferencias en las condiciones y los tipos de arreglos y servicios para prestar tales apoyos. Estos cuatro elementos son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y posibilidad de elección y control.*<sup>27</sup>

*En cuanto a la **disponibilidad**, se señala que debe disponerse de arreglos y servicios de apoyo adecuados y en cantidad suficiente para todas las personas con discapacidad, estableciendo un sistema en el marco del derecho interno que incluya apoyos para la comunicación, la adopción de decisiones y la movilidad, asistencia personal, servicios relacionados con el sistema de vida y servicios comunitarios, garantizando la existencia de profesionistas fiables, cualificados y capacitados, así como dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad.*

*Por lo que hace a la **accesibilidad**, se refiere a que los arreglos y servicios de apoyo deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad, en especial las más desfavorecidas, sin discriminación alguna. En este sentido, las condiciones para tener acceso al apoyo deben ser razonables, proporcionadas y transparentes.*

*En relación con la **aceptabilidad**, esto es, que los Estados adopten todas las medidas que procedan para asegurar que los programas de apoyo incorporen un enfoque basado en los derechos,*

---

<sup>25</sup> Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General N° 1 (2014), Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley.

<sup>26</sup> Como lo señala en su *amicus curiae* la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

<sup>27</sup> Informe A/HRC/34/58, de veinte de diciembre de dos mil dieciséis.

*se proporcionen a título voluntario y respeten los derechos y dignidad de las personas con discapacidad, los apoyos deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, tener en cuenta los aspectos de género, las deficiencias y las necesidades a lo largo del ciclo vital, estar diseñados de modo que se respete la intimidad de los usuarios y que sean de buena calidad.*

*Finalmente, los Estados deben diseñar arreglos y servicios de apoyo que den a las personas con discapacidad la **posibilidad de elección y control** de forma directa, planificando y dirigiendo su propio apoyo, mediante diversas medidas, como es la financiación individual, así como decidir quién les presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo que desean recibir.*

*Por su parte, **las salvaguardias** tienen como finalidad asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, así como que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Las salvaguardias deberán estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial, competente e imparcial.*

*En este sentido, esta Corte entiende que cualquier persona que tenga conocimiento de una influencia indebida o conflicto de interés puede dar parte al juez, constituyendo así una salvaguardia.*

*No puede olvidarse que, mediante el sistema de apoyos y salvaguardias, debe garantizarse el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de tal manera que el denominado “interés superior” debe sustituirse por la “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, ya que, bajo este paradigma, se respetan la autonomía y libertad personal y, en general, todos los derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Así, cuando la persona con discapacidad manifieste de algún modo su voluntad, acorde con el paradigma de la mejor interpretación posible, habría que establecer y respetar los mecanismos necesarios para que esa manifestación no sufra detrimento o sea sustituida.<sup>28</sup>*

*Desde esta óptica, el mayor interés no consiste en que otro decida, sino en procurar que la persona con discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por sí misma sobre*

---

<sup>28</sup> Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, 1ª CXV/2015 (10ª), Décima Época, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 235, registro 2015138, de rubro y texto: “**PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MEJOR INTERPRETACIÓN POSIBLE DE SU VOLUNTAD Y SUS PREFERENCIAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 12 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)**”. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados deriva que su objetivo principal es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. En ese sentido, cuando pese a realizarse un esfuerzo considerable fuere imposible determinar la voluntad y las preferencias de la persona, la determinación del denominado “interés superior” debe sustituirse por la “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, ya que bajo este paradigma se respetan su autonomía y libertad personal y, en general, todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Así, cuando la persona con discapacidad hubiese manifestado de algún modo su voluntad, acorde con el paradigma de la mejor interpretación posible, habría que establecer y respetar los mecanismos necesarios para que esa manifestación no sufra detrimento o sea sustituida.” Ponente: Ministro ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Díez de Sollano.

su vida. Por ello, deben instaurarse mecanismos de asistencia para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones al igual que los demás miembros de la sociedad, esto es, favorecer la autonomía.

En este sentido ha de señalarse, acorde con lo dispuesto por la CDPD, que las salvaguardias deben estar sujetas a exámenes periódicos por parte de autoridades judiciales; esto es, deben ser revisables para que cumplan efectivamente su función.

**Derecho a una vida independiente.** Esta Sala considera, que el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad conlleva tener libertad de elección, así como capacidad de control sobre las decisiones que afectan a la propia vida. Por tanto, comporta que las personas con discapacidad cuenten con todos los medios necesarios para que puedan tomar opciones, ejercer el control sobre sus vidas y adoptar todas las decisiones que las afecten. Desde este enfoque, una de las barreras para ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, ya sea mediante leyes y prácticas oficiales o de facto, por la sustitución en la adopción de decisiones relativas a los sistemas de vida.<sup>29</sup>

El derecho a una vida independiente no es compatible con la promoción de un estilo o sistema de vida individual “predeterminado”. En este sentido, la elección de cómo, dónde y con quién vivir es la idea central del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Por tanto, las decisiones personales no se limitan al lugar de residencia, sino que abarcan todos los aspectos del sistema de vida de la persona (como pueden ser sus horarios, rutinas, modo y estilo de vida, tanto en la esfera privada como en la pública y tanto en lo cotidiano como a largo plazo). Estas elecciones no las posibilita el régimen de interdicción, sino todo lo contrario, pues se basa en un modelo de sustitución de voluntad en el que el tutor es quien decide todas estas cuestiones.

Desde la perspectiva conjunta de las vulneraciones expresadas, esta Sala enfatiza que la interdicción no es conforme con el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad. La independencia, como forma de autonomía personal, implica que la persona con discapacidad no se vea privada de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida, así como sus actividades cotidianas, pues el derecho a una vida independiente está vinculado al reconocimiento y el ejercicio de la capacidad jurídica: es la base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma independiente en la comunidad.

**Régimen de interdicción y estereotipos.** Esta Sala ya ha señalado que las normas pueden funcionar **como medios textuales a través de los cuales se configuran mensajes que conllevan un juicio de valor que puede ser negativo.**<sup>30</sup> El hecho de que las normas impugnadas no prevean la existencia de una multiplicidad de

---

<sup>29</sup> Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

<sup>30</sup> Véase el amparo directo en revisión 152/2013, resuelto el 23 de abril de 2014. Ponente: Ministro ALFREDO Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.



*diversidades funcionales –las cuales pueden variar en grado e intensidad y pueden producir distintas discapacidades según las barreras y actitudes sociales con las que se encuentren– tiene como consecuencia que se transmita el mensaje de que la discapacidad es un padecimiento que sólo puede ser “tratado” o “mitigado” mediante medidas extremas, como la restricción absoluta de la capacidad de ejercicio.*

*Esta forma de ver y concebir la discapacidad implica tratar a las personas con discapacidad como meros objetos de cuidado y no como sujetos de derechos, pues se parte de la premisa de que la discapacidad inhabilita por completo a la persona, además de que se pone el acento en la deficiencia. En ese sentido, esta concepción refuerza la idea de que sólo mediante la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad se “mitigan” los efectos de la discapacidad y, por ende, las barreras y actitudes sociales permanecen inalteradas.*

*En lugar de conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad, el estado de interdicción, al prever la restricción absoluta de la capacidad de ejercicio, invisibiliza y excluye a las personas con discapacidad, pues no les permite conducirse con autonomía e interactuar con los demás grupos, personas e intereses que componen la sociedad, por lo que refuerza los estigmas y estereotipos.”*

**Hasta aquí la invocación de las consideraciones sostenidas en el amparo en revisión 1368/2015 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reproducidas en los demás precedentes señalados.**

En vista de lo expuesto, a juicio de esta Sala, ante la circunstancia que del acta protocolizada bajo escritura número 1[No.72]\_ELIMINADO\_el\_No.\_59\_[59] de fecha 08 ocho de febrero del 2021 dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público número [No.73]\_ELIMINADO\_el\_número\_16\_[16] de Guadalajara, Jalisco, Licenciado [No.74]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], se advierte el reconocimiento de salud mental de la señora [No.75]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], que a causa de su edad, pudiere estar en cierta medida afectada; pues si bien en lo general, de lo que se advierte del cuestionario que se desahogó en dicho reconocimiento sin presencia del Juzgador de

origen, este Órgano Colegiado puede apreciar que por lo menos en la entrevista predominó en ella un estado de lucidez notable al mencionar su nombre, edad y que se encuentra sana, sí manifestó confusión en algunos aspectos como la cantidad de hijos que le sobreviven, esta desorientada en tiempo y lugar, ya que carece del conocimiento del domicilio, pero si realizó una operación aritmética sencilla de 2 dos más dos, etcétera; además que, desde luego, físicamente requiere de auxilio para realizar sus actividades cotidianas, sin embargo no se le explicó de manera lisa y llana del trámite que nos ocupa. Lo anterior hace necesario que el Juez de Origen previo a proveer sobre la oposición realizada por parte legítima, como diligencia para mejor proveer y como medida de protección a los derechos humanos de **[No.76] \_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]** establezca un sistema de apoyos y salvaguardias adecuado a su caso, que facilite a ésta, la posibilidad de ejercer sus derechos *sobre su persona y sus bienes* con plenitud y conforme a su voluntad; incluso, desahogando previamente las diligencias necesarias para ello y con la anuencia y participación de la propia interesada.

Ello dado que al ser una persona adulta mayor merece especial protección por parte del Estado, tal y como lo establecen **los artículos 25 párrafo 1, de la Declaración universal de los Derechos Humanos, así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, Declaración de los Derechos y Responsabilidad de las Personas de Edad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la**

## Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982.

Resultando aplicables las tesis:

Localizable bajo Registro digital: 2022427, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: I.11o.C.39 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1939, Tipo: Aislada.

**“ADULTOS MAYORES. LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD OCASIONADA POR LA DISMINUCIÓN DE LA MOTRICIDAD Y LA PÉRDIDA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DERIVADAS DE LA AVANZADA EDAD DE LAS PERSONAS, OBLIGA A QUE EN JUICIO SE LES TENGA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, A EFECTO DE LLEVAR SU DEFENSA EN UN PLANO DE IGUALDAD.** En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se desarrolló el Programa Nacional Gerontológico 2016-2018, con la finalidad de reunir los objetivos, estrategias y acciones encaminadas a proporcionar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, para brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. El citado estudio arrojó datos respecto a la dependencia disfuncional de terceros, dado el deterioro que sufren las personas adultas mayores. A ese respecto, se señaló que existe un deterioro natural de la salud de las personas adultas mayores, con relación a otros grupos de edad más jóvenes, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad. Además, se precisó que la exclusión social de dichas personas, los ingresos insuficientes y las elevadas tasas de vulnerabilidad por carencias sociales aceleran ese proceso natural y aumentan su dependencia funcional. Se adujo que se debe considerar que el deterioro cognitivo y la disminución de la motricidad traen aparejados problemas sociales y económicos que impactan en la dependencia de las personas adultas mayores con terceros y generan costos de asistencia médica y social, siendo más vulnerables las personas con menos recursos o que viven en las zonas menos afluentes – Organización Mundial de la Salud, dos mil dieciséis– y, por lo tanto, las personas aquejadas y aquellas a quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, legal y económico. Se establece que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición –ENSANUT, dos mil doce–, las limitaciones asociadas con discapacidad para personas adultas mayores aumentan con la edad. Lo anterior pone de relieve que, a mayor edad, aumenta la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas, por lo que es claro que en una persona de muy avanzada edad –más de noventa años– por el proceso natural del envejecimiento, existe una presunción grave de que se encuentra disminuida en dichas capacidades. Ahora bien, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país sino, además, en diversas

*recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en diversas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional, también se consagran los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares; protección que también se advierte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. Las citadas disposiciones adquieren particular relevancia, pues no puede pasar inadvertido que el artículo 1o. constitucional determina que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Carta Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En esa tesitura, si se aprecia que una persona no sólo es adulta mayor –calidad que se adquiere al cumplir sesenta años de edad–, sino que cuenta con una muy avanzada edad –más de noventa años–, existe una grave presunción de que su capacidad motora y cognitiva se encuentra disminuida, por lo que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial que hacia sus derechos ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país como en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Lo cual también lleva a presumir que la capacidad de defensa de esa persona adulta mayor está disminuida, pues existe la presunción grave de que sus capacidades físicas y cognitivas se encuentran disminuidas en comparación con personas de menor edad, lo que obliga a que en juicio se les tenga consideración especial, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas.”*

Localizable bajo Registro digital: 2018615, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXLV/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 294, Tipo: Aislada.

**“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN MODO DE SALVAGUARDARLO.** *En todas aquellas actuaciones o decisiones de los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la aplicación e interpretación de las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad deben tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma objeto de interpretación puede tener una dicción que, aunque no restrinja abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no contemplar la diversidad funcional. En estos*

*supuestos es especialmente importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera Sala advierte enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera releva a las autoridades de la obligación de cumplir con las formalidades del procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir lo contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña también un quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 13 de la Convención en relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre otros aspectos, impide que puedan defender sus derechos ante los tribunales.”*

Respecto al tercer agravio hecho valer, en los cuales refieren que el auto impugnado emitido por el juez primario, viola las garantías de la señora [No.77]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] previstas por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente resulta fundado, toda vez que el juez de origen no realizó una ponderación a los derechos humanos de la adulta mayor en la cual se le otorgue una mayor eficacia protectora a su persona, al no darle un tratamiento digno en igualdad de condiciones a participar en dicho trámite y para que ejerza su derecho de acceso a la justicia, sus derechos y garantías procesales, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y evitar actos que le priven su derechos pro persona.

En cuanto al cuarto agravio, debe decirse que el mismo es inatendible, al no ser un motivo tendiente a modificar o revocar el auto impugnado, sino una serie de manifestaciones que sobre las mismas en todo caso queda expedito su derecho para que los haga valer en la forma y términos establecidos en la ley.

**V.- CONCLUSIÓN:** Bajo ese orden de ideas, las suscritas Magistradas integrantes de este cuerpo Colegiado, arribamos a la

conclusión de que lo procedente es **MODIFICAR** el auto impugnado, a efecto de previo a proveer respecto a la oposición de

[No.78]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]

[No.79]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] a la declaratoria de estado de interdicción; el juez natural deberá ordenar como diligencia para mejor proveer notificar directamente a la señora [No.80]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] de la tramitación de dicho procedimiento en el que se le dé debida participación, al igual para que el juzgador de manera directa y personal le realice una entrevista a la antes referida en su domicilio en la que se le explique de manera lisa y llana el trámite que se trata, ante personas de su confianza, y con su consentimiento, establecer dicho sistema de apoyos y salvaguardias tomando en cuenta sus particulares circunstancias, que podrá comprender, sin ser limitativo: a) la determinación de las personas que ella designe como de su entera confianza para que la asistan en sus cuidados personales; b) la designación de apoyos de tipo técnico o especializado; c) las previsiones de cuidado de su salud; y d) el auxilio que ella pida, si es su deseo, en torno a decisiones sobre la administración o destino de sus bienes; etcétera. Así como la determinación de salvaguardias apropiadas para vigilar el cumplimiento de las medidas de apoyo que se establezcan. Todo ello, procurando un ambiente apropiado y una comunicación en lenguaje sencillo y de fácil comprensión para [NO.81]\_ELIMINADO\_EL\_NOMBRE\_COMPLETO\_[1]; lo que se hará por ésta Sala ante la ausencia de reenvío que priva en nuestro sistema procesal, tal y como lo determina la tesis aislada emitida por el Honorable Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, página 223, de rubro y texto:



**“APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.** *En el sistema procesal en que no existe reenvío, el Tribunal de apelación debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al inferior que las subsane, porque debe corregirlas por sí mismo.”*

Por lo tanto, se modifica el auto de fecha 24 veinticuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós, para quedar en los siguientes términos:

“Por economía procesal se procede acordar a los escritos de fecha 03 tres de febrero del 2022 y 11 once de febrero del 2022 en los siguientes términos:

Se tiene por recibido el oficio [No.82]\_ELIMINADO\_el\_No.\_59\_[59] del cuadernillo e exhorto [No.83]\_ELIMINADA\_la\_información\_correspondiente\_a\_una\_persona\_relacionada\_con\_un\_procedimiento\_civil\_[78] del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán de navarro, Jalisco; en el que informa mediante oficio [No.84]\_ELIMINADO\_el\_No.\_59\_[59] expedido por el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Autlán de navarro, Jalisco y en atención a lo ordenado por este juzgado le informo que se procedió a inmovilizar la propiedad ubicada en la [No.85]\_ELIMINADO\_el\_domicilio\_[2].

Por recibido el oficio [No.86]\_ELIMINADO\_el\_No.\_59\_[59] que remite el Jugado (sic) Segundo de lo Civil del Décimo Segundo Partido Judicial Autlán, Navarro, Jalisco, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto que le correspondió en turno derivado del presente juicio, mismo que se ordena agregar en autos para que surta sus efectos legales conducentes, a la luz de los artículos 99 y 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Por recibido el oficio [No.87]\_ELIMINADO\_el\_No.\_59\_[59] que remite la Secretaria General de Acuerdos por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con lo en el actuado, mismo que se ordena agregar en autos para que surta sus efectos legales conducentes, a la luz de los artículos 99 y 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Conforme al escrito presentado con fecha 27 veintisiete de enero del año en curso, téngase recibido en oficialía de partes de este Juzgado, el escrito firmado por [No.88]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] [No.89]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]; visto su

contenido y en atención a lo que solicita, se le tiene manifestando su inconformidad y oposición a las presentes diligencias; sin embargo previo a proveer como en derecho corresponda y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en relación a los artículos 25 párrafo 1, de la Declaración universal de los Derechos Humanos, así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", Declaración de los Derechos y Responsabilidad de las Personas de Edad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, **se ordena como diligencia para mejor proveer, notificar a la señora [No.90] ELIMINADO el nombre completo [1]** para que se cuente con su anuencia y participación en el procedimiento, así mismo se deberá llevar a cabo una entrevista por parte del juzgador de manera directa y personal con la misma en su domicilio, ante personas de su confianza, y con su consentimiento, en la cual se le explique de manera lisa y llana el trámite de que se trata, en el cual se deberá establecer un sistema de apoyos y salvaguardias tomando en cuenta sus particulares circunstancias, que podrá comprender, sin ser limitativo: *a) la determinación de las personas que ella designe como de su entera confianza para que la asistan en sus cuidados personales; b) la designación de apoyos de tipo técnico o especializado; c) las previsiones de cuidado de su salud; y d) el auxilio que ella pida, si es su deseo, en torno a decisiones sobre la administración o destino de sus bienes; etcétera, así como la determinación de salvaguardias apropiadas para vigilar el cumplimiento de las medidas de apoyo que se establezcan.* Todo ello, procurando un ambiente apropiado y una comunicación en lenguaje sencillo y de fácil comprensión para [NO.91] ELIMINADO EL NOMBRE COMPLETO [1].

Teniendo aplicación al caso los siguientes criterios:

Localizable bajo Registro digital: 2022427, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: I.11o.C.39 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1939, Tipo: Aislada.

***“ADULTOS MAYORES. LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD OCASIONADA POR LA DISMINUCIÓN DE LA MOTRICIDAD Y LA PÉRDIDA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DERIVADAS DE LA AVANZADA EDAD DE LAS PERSONAS, OBLIGA A QUE EN JUICIO SE LES TENGA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, A EFECTO DE LLEVAR SU DEFENSA EN UN PLANO DE***

**IGUALDAD.** *En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se desarrolló el Programa Nacional Gerontológico 2016-2018, con la finalidad de reunir los objetivos, estrategias y acciones encaminadas a proporcionar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, para brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. El citado estudio arrojó datos respecto a la dependencia disfuncional de terceros, dado el deterioro que sufren las personas adultas mayores. A ese respecto, se señaló que existe un deterioro natural de la salud de las personas adultas mayores, con relación a otros grupos de edad más jóvenes, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad. Además, se precisó que la exclusión social de dichas personas, los ingresos insuficientes y las elevadas tasas de vulnerabilidad por carencias sociales aceleran ese proceso natural y aumentan su dependencia funcional. Se adujo que se debe considerar que el deterioro cognitivo y la disminución de la motricidad traen aparejados problemas sociales y económicos que impactan en la dependencia de las personas adultas mayores con terceros y generan costos de asistencia médica y social, siendo más vulnerables las personas con menos recursos o que viven en las zonas menos afluentes – Organización Mundial de la Salud, dos mil dieciséis– y, por lo tanto, las personas aquejadas y aquellas a quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, legal y económico. Se establece que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición –ENSANUT, dos mil doce–, las limitaciones asociadas con discapacidad para personas adultas mayores aumentan con la edad. Lo anterior pone de relieve que, a mayor edad, aumenta la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas, por lo que es claro que en una persona de muy avanzada edad –más de noventa años– por el proceso natural del envejecimiento, existe una presunción grave de que se encuentra disminuida en dichas capacidades. Ahora bien, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país sino, además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en diversas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional, también se consagran los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares; protección que también se advierte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. Las citadas disposiciones*

*adquieren particular relevancia, pues no puede pasar inadvertido que el artículo 1o. constitucional determina que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Carta Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En esa tesitura, si se aprecia que una persona no sólo es adulta mayor –calidad que se adquiere al cumplir sesenta años de edad–, sino que cuenta con una muy avanzada edad –más de noventa años–, existe una grave presunción de que su capacidad motora y cognitiva se encuentra disminuida, por lo que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial que hacia sus derechos ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país como en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Lo cual también lleva a presumir que la capacidad de defensa de esa persona adulta mayor está disminuida, pues existe la presunción grave de que sus capacidades físicas y cognitivas se encuentran disminuidas en comparación con personas de menor edad, lo que obliga a que en juicio se les tenga consideración especial, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas.”*

*Localizable bajo Registro digital: 2018615, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXLV/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 294, Tipo: Aislada.*

**“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN MODO DE SALVAGUARDARLO.** *En todas aquellas actuaciones o decisiones de los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la aplicación e interpretación de las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad deben tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma objeto de interpretación puede tener una dicción que, aunque no restrinja abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no contemplar la diversidad funcional. En estos supuestos es especialmente importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera Sala advierte enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera releva a las autoridades de*

*la obligación de cumplir con las formalidades del procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir lo contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña también un quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 13 de la Convención en relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre otros aspectos, impide que puedan defender sus derechos ante los tribunales.”*

Debiendo subsistir las medidas provisionales y de representación decretadas en los autos de fechas 07 siete de junio, 15 quince de septiembre y 17 diecisiete de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, lo anterior a fin de no vulnerar la integridad y los bienes de la adulta mayor. **No obstante lo anterior, y una vez que se lleve a cabo la entrevista ordenada en el presente auto, esta autoridad deberá de tomar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar la integridad y los derechos de la adulta mayor** [No.92] ELIMINADO el nombre completo [1], lo anterior de conformidad con el numeral 82 y 83 del **Enjuiciamiento Civil del Estado, en relación los numerales 12 y 13 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.**

...

**VI.- COSTAS SEGUNDA INSTANCIA:** En otro orden, al no actualizase alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 142 de la Ley Procesal Civil, no se realiza condena en costas por lo que a esta instancia se refiere.

**VII.- FORMATO DE LECTURA FÁCIL.-**

[NO.93] ELIMINADO EL NOMBRE COMPLETO [1] tus hijos  
[No.94] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.95] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.96] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.97] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.98] ELIMINADO el nombre completo [1],  
[No.99] ELIMINADO el nombre completo [1] y  
[No.100] ELIMINADO el nombre completo [1] de apellidos

[No.101]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]  
[No.102]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] y  
[No.103]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] le pidieron a  
un juez, que estableciera que por tu edad tan avanzada, ya no te  
permite entender y decidir sobre ti misma y sobre tus propiedades,  
porque se te olvidan las cosas y ya no reconoces bien a las  
personas; por eso, le solicitaron al juez que te nombrara un tutor,  
para que él cuidara de ti y de tus bienes, porque tú ya no puedes  
hacerlo. El juez decidió que **tu hija**  
[No.104]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] fuera tu tutor  
y pudiera cuidar y decidir sobre tus cosas.

Tu hijo  
[NO.105]\_ELIMINADO\_EL\_NOMBRE\_COMPLETO\_[1]  
[NO.106]\_ELIMINADO\_EL\_NOMBRE\_COMPLETO\_[1] no  
estuvo de acuerdo, porque él piensa que te encuentras en  
perfectas condiciones de salud, que sí te permite a ti misma  
decidir sobre ti y sobre tus bienes, aun cuando de pronto olvides  
cosas debido a tu edad, por lo que un juez dio por terminado lo  
que pidieron tus hijos.

Pero tus hijos  
[No.107]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.108]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.109]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.110]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.111]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1],  
[No.112]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] y  
[No.113]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] de apellidos  
[No.114]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]  
[No.115]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] y  
[No.116]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1] no estuvieron



*de acuerdo con lo que dijo el juez y nos solicitaron que revisáramos lo que él había dicho; ante ello, consideramos que previo a lo que dijo el juez, se te debe preguntar primero si estás de acuerdo con eso y que tú decidas quién quieres que este al pendiente de ti para que te acompañe, así como para elijas a una persona de tu confianza que te ayude y te auxilie en lo que necesitas sobre tu persona y las cosas que tienes.*

*Nos despedimos de ti con gusto, deseando que te encuentres muy bien de salud.*

Bajo ese contexto y con fundamento en lo que establecen los artículos 438, 439, 441, 444 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se resuelve la presente al tenor de las siguientes:

### **PROPOSICIONES:**

**PRIMERA.-** Los agravios expresados por **[No.117]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]** y **[No.118]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, el primero como representante común de **[No.119]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.120]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.121]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.122]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, **[No.123]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]** y **[No.124]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, todos de apellidos **[No.125]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1]**, y la segunda como tutriz interina de la persona incapaz



[No.126]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], resultaron  
**EN PARTE FUNDADOS**, en consecuencia:

**SEGUNDA.-** Se **MODIFICA** el Auto de fecha 24 veinticuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós, pronunciada por el ciudadano Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Partido Judicial con residencia en Unión de Tula, Jalisco, en los autos del juicio de **JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (declaración de estado de interdicción)**, promovido respecto a [No.127]\_ELIMINADO\_el\_nombre\_completo\_[1], radicado bajo expediente **366/2020**, debiendo de quedar el mismo en los términos señalados en el considerando quinto de la presente resolución.

**TERCERA.-** No se hace especial condena al pago de costas por lo que a esta segunda instancia se refiere, al no actualizarse alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 142 de la Ley Procesal Civil.

**CUARTA.-** Con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos originales y documentos anexos, al Juzgado de origen y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

**En razón de que la presente resolución se pronunció dentro del plazo de 30 treinta días que dispone el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme lo disponen los arábigos 109, fracción VI y 129 del cuerpo de leyes invocado, notifíquese por medio del Boletín Judicial.**

**NOTIFÍQUESE.**

Así lo resolvieron por unanimidad las integrantes de la Novena Sala del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, por unanimidad de votos de las Magistradas **ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ (ponente)**, **LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ** y **VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ**, actuando ante el Secretario de Acuerdos Licenciado **RAÚL GONZÁLEZ MARTÍNEZ**, quien autoriza y da fe.

**MGDA. PRESIDENTA ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ**

**MGDA. LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ**

**MGDA. VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ**

**SECRETARIO DE ACUERDOS RAÚL GONZÁLEZ MARTÍNEZ**

Esta foja, forma parte de la resolución pronunciada el día 06 seis de junio del año 2022 dos mil veintidós, dentro de los autos del toca de apelación **285/2022** derivado del Juicio de **Jurisdicción Voluntaria (declaración de estado de interdicción)**, promovido respecto a **[No.128] ELIMINADO el nombre completo [1]**, ventilado ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Partido Judicial con residencia en Unión de Tula, Jalisco, bajo expediente **366/2020**.-----

FUNDAMENTACION LEGAL

\*LGPPICR. Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No.1 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.2 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.3 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.4 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.5 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.6 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.7 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.8 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.9 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.10 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.11 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.12 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.13  
ELIMINADA\_la\_información\_correspondiente\_a\_una\_persona\_relacionada\_con\_u

n\_procedimiento\_civil en 1 renglon(es) por ser un dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de los LGPPICR\*.

No.14 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.15 ELIMINADO\_el\_domicilio en 2 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.16 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.17 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.18 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.19 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.20 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.21 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.22 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.23 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.24 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.25 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.26 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.27 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.28 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.29 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.30 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.31 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.32 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.33 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.34 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.35 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.36 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.37 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.38 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.39 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.40 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.41 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.42 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.43 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.44 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.45 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.46 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.47 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.48 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.49 ELIMINADO\_el\_número\_16 en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.50 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.51 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.52 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.53 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.54 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.55 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.56 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.57 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.58 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.59 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.60 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.61 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.62 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.63 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.64 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.65 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.66 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.67 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.68 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.



No.69 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.70 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.71 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.72 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.73 ELIMINADO\_el\_número\_16 en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.74 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.75 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.76 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.77 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.78 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.79 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.80 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.81 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.82 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.83

ELIMINADA\_la\_información\_correspondiente\_a\_una\_persona\_relacionada\_con\_un\_procedimiento\_civil en 1 renglon(es) por ser un dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de los LGPPICR\*.

No.84 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.85 ELIMINADO\_el\_domicilio en 2 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.86 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.87 ELIMINADO\_el\_No.\_59 en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR\*.

No.88 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.89 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.90 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.91 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.92 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.93 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.94 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.95 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.96 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.97 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.98 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.99 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.100 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.101 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.102 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.103 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.104 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.105 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.106 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.107 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.108 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.109 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.110 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.111 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.112 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.113 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.114 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.115 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.116 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.117 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.118 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.119 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.120 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.121 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.122 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.123 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.124 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.125 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.126 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.127 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.128 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.

No.129 ELIMINADO\_el\_nombre\_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR\*.